



## RESOLUCION ADMINISTRATIVA ANH N° 0810/2012

La Paz, 20 de Abril de 2012

### VISTOS:

El Auto de Formulación de Cargo fecha 01 de febrero de 2011 (en adelante el Auto de Cargo) emitido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (en adelante la ANH), los antecedentes del procedimiento administrativo sancionador de cargo; las normas jurídicas, legales, administrativas, sectoriales, regulatorias y sus reglamentos vigentes y aplicables, y:

### CONSIDERANDO:

Que, el Informe Técnico ODEC 0062/2011 INF de fecha 31 de enero de 2011 (en adelante el Informe), cuyo contenido reproduce las observaciones consignadas en el Protocolo de Verificación Volumétrica en Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos N° 002503 de fecha 29 de enero de 2011 (en adelante el Protocolo), indica que de la inspección y el control de comercialización realizado a la Empresa Estación de Servicio de Combustibles Líquidos "Varela" (en adelante la Estación) ubicada en el Km. 15 de la carretera entre la ciudad de El Alto y Tiahuanaco, localidad de Laja del departamento de La Paz, se evidencio que la misma no contaba con los partes de recepción de combustibles líquidos.

Que, ante la existencia de indicios de contravención al ordenamiento jurídico regulatorio, la ANH amparada en lo dispuesto por el parágrafo I) del Art. 77 del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, mediante Auto de Cargo, formuló el cargo respectivo contra la Estación por ser presunta responsable de no emitir los partes de recepción de combustibles líquidos, conducta contravencional que se encuentra prevista y sancionada por el Artículo 11 y 14 del Decreto Supremo No. 29158 de 13 de junio de 2010 (en adelante el Decreto N° 29158).

### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el parágrafo II) del Art. 77 del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, mediante diligencia de fecha 14 de marzo de 2012 se notificó a la Estación con el Auto de Cargo, misma que se apersono y contesto el cargo formulado, mediante memorial con CB 871172, presentado en fecha 28 de marzo de 2012, adjuntando prueba de descargo consistente en: **a)** Orden de Despacho emitida por YPFB, **b)** Factura N° 9969 de fecha 30/12/2010 emitida por YPFB, **c)** Parte de Recepción N° 96 de fecha 31/12/2010 emitida por la Estación.

### CONSIDERANDO:

Que, en cuanto al derecho vigente y aplicable que fundamenta el presente acto administrativo, el inciso a) del Art. 25 de la Ley No. 3058 de 17 de mayo de 2005, concordante con el Art. 1 y los incisos a), d), g), h) y k) del Art. 10 de la Ley No. 1600 de 28 de octubre de 1994 y con la parte in fine del Art. 2 y 5 del Reglamento, establece que la ANH cuenta con las atribuciones -entre otras-, de cumplir y hacer cumplir las normas legales sectoriales regulatorias y sus reglamentos, vigilar la correcta prestación de los servicios por parte de las empresas reguladas, proteger los derechos de los consumidores, conocer y procesar las denuncias y reclamos presentados respecto a actividades bajo jurisdicción del Sistema de Regulación Sectorial y aplicar sanciones en los casos previstos por las normas legales sectoriales.

Que, en correspondencia con el principio de sometimiento pleno a la ley que rigen los actos de la administración pública, asegurando a los administrados el debido proceso y el derecho a la defensa, la sustanciación del presente proceso se encuentra sujeta al



*[Handwritten signature]*

procedimiento legalmente establecido en el Capítulo III del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, gozando en consecuencia de plena validez legal.

Que, de conformidad con lo establecido por los Artículos 78 y 80 inciso a) del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, el Director Ejecutivo de la ANH podrá emitir Resolución Administrativa contestado el traslado de los cargos o vencido el plazo para hacerlo cuando no hubiere abierto un plazo probatorio, facultad discrecional que responde a la valoración realizada al caso en particular.

Que, toda actividad sancionadora del Estado, sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, debe ser impuesta previo proceso, en el que se respeten todos los derechos inherentes al debido proceso previsto en el inciso c) del Artículo 4 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, derechos entre los cuales se encuentra el derecho a la defensa, que implica a su vez, entre otros elementos, la contradicción y producción de pruebas que realice el administrado y/o regulado (la Estación) para desvirtuar el cargo formulado en su contra y garantizar de esa forma que la decisión administrativa se ajuste y/o funde con mayor objetividad, certeza, amplitud y claridad, en la verdad material de los hechos, de ahí que de haber presentado la Estación documental de descargo, ésta también hubiese sido objeto de consideración y consiguiente valoración.

Que, en aplicación de lo establecido en los Artículos 82 y 83 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, corresponde efectuar una correcta relación de los hechos expuestos y sustentados en las etapas de iniciación y tramitación del presente proceso administrativo sancionador de cargo y en consecuencia una correcta compulsión de las pruebas de cargo y descargo que cursaren dentro del presente proceso administrativo sancionador, de conformidad a la regla de la sana crítica o valoración prudente y razonada de la prueba.

#### **CONSIDERANDO:**

Que, consiguientemente, en aplicación del principio de verdad material establecido en el Artículo 4 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, la administración pública tiene como obligación, el de recurrir a todos los medios necesarios que permitan obtener la verdad material de cómo acontecieron los hechos, así como, considerar y valorar toda prueba que permita profundizar la investigación, es decir, aquella que resulte totalmente vinculante a determinar la existencia o no de la infracción y que haga o infiera en el fondo del proceso, pudiendo descartar o apartarse de aquella que resulte ajena a lo que se pretende evidenciar.

Que, en ese sentido, el acto administrativo que resuelva el presente proceso administrativo debe considerar además de los antecedentes, los hechos facticos que se adecuan a la infracción y/o contravención administrativa, en esa línea aplicando el principio de oficialidad de la prueba, la doctrina es uniforme al establecer que la verdad material: *"es aquella que busca en el procedimiento administrativo, el conocimiento de la realidad, de esa verdad, en la acepción latina del término veritas: lo exacto, riguroso. No permite contentarse con el mero estudio de las actuaciones sino que deben arbitrarse los medios por los cuales, el momento del dictado de la decisión, se conozcan todas aquellas cuestiones, permitiendo así el más aproximado a los hechos que dieron origen al procedimiento"* (Abelaztury, Cilurzo, Curso de Procedimiento Administrativo Abeledo – Perrot, pág. 29)

Que, respecto a la presunta infracción cometida por la Estación, la ANH produce prueba documental consistente en el Informe Técnico y el Protocolo, mismos que por la fuerza probatoria que la legislación nacional y comparada les otorga en su la calidad de documentos públicos, gozan de total validez y legitimidad por estar sometidos plenamente a la Ley, de acuerdo a lo establecido en el Art. 27 y 32 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002 concordante con el Artículo 48 del Decreto supremo N° 27113 de 23 de julio de 2003, y a los cuales se adjunta un Reporte Mensual de Movimiento de Productos de la

Estación y Parte de Salida N° 97238 de 31/12/2010 y contra los cuales la empresa tenía la carga de probar que los hechos expresados en éstos no fueron descritos como realmente ocurrieron.

Que, bajo ese marco normativo, dentro el presente procedimiento la Estación ha gozado de un debido proceso, pues no ha tenido limitación alguna en cuanto al derecho a su defensa, contando con la posibilidad de asumir la misma a través de cualquier medio de prueba admisible en derecho, que se encuentren direccionados y le permitan desvirtuar la infracción por la cual se le formulo cargo, aspecto que si ha logrado al haber presentado la prueba de descargo suficiente consistente en a) La Orden de Despacho N° 9969, así como, la Factura N° 9969 emitidas por YPF, que evidencian que la Estación, en fecha 30/12/2010 cancelo su cupo de diesel oíl por la cantidad de 10.000 litros, aspecto que con razón se evidencia en el Reporte de Movimiento Mensual de Productos de la misma.; b) El Parte de Recepción N° 96 que acredita junto al Parte de Salida N° 97238 adjuntado al Protocolo emitido por la ANH que, la Estación procedió a recoger el cupo citado precedentemente en fecha 31/12/2010.

Que, además de los fundamentos expuestos precedentemente, cabe señalar que de conformidad con el principio de tipicidad, presunción de inocencia y razonabilidad que la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002 prevé, la Estación ha demostrado que si bien no se exhibió el mencionado Parte de Recepción el día en que se llevo a cabo la inspección, el mismo si se había emitido, acción ésta la de **EMITIR** en torno a la cual gira la tipificación de la infracción y que en el presente caso de autos no se ha demostrado.

#### **CONSIDERANDO:**

Que, el Art. 11 del Decreto N° 29158 que modifica el Artículo 3 del decreto supremo N° 28865, determina que: *"La distribución, el transporte y la recepción de diesel oíl y gasolinas de las plantas de almacenaje hasta las estaciones de servicio, serán controladas mediante un parte de salida y un parte de recepción, conforme al siguiente procedimiento:....., 2 Al momento de la recepción de diesel oíl y gasolinas, la estación de servicio de destino autorizada, deberá emitir un parte de recepción..... Los operadores que incurran en las infracciones establecidas en el presente artículo serán pasibles a las sanciones establecidas en el párrafo II del artículo 14"*.

Que, de los artículos señalados precedentemente, se infiere que la Estación no sólo está obligada a cumplir las normas que se refieren a la reglamentación de sus actividades, sino también a aquellas que direccionan sus actos, en pro del resguardo a los derechos y la seguridad de los consumidores finales y el continuo abastecimiento a la población en general, aspecto que ha demostrado haber cumplido.

#### **CONSIDERANDO:**

Que, de lo dispuesto en el párrafo I) del Artículo 51 y 52 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, se colige que todo procedimiento administrativo deberá necesariamente terminar o concluir con la emisión de una resolución administrativa dictada por el órgano administrativo competente, salvando los recursos establecidos por Ley.

Que, en total congruencia, los incisos b) y e) del Artículo 28 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002 y el párrafo I) del Artículo 8 del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, señalan que: *"Las resoluciones se pronunciarán en forma escrita y fundamentada en los hechos y el derecho..., decidirán de manera expresa y precisa las cuestiones planteadas y serán fundamentadas en cuanto a su objeto en los hechos, las pruebas y las razones de derecho que le dan sustento."*

Que, la decisión que adopte un órgano de la administración pública, debe implicar, entre otros, el cumplimiento de los principios de verdad material y oficialidad de la prueba, el

respeto al principio de contradicción de las partes en el proceso, además debe ser congruente con los hechos y antecedentes que le sirven de causa y emitirse con la debida fundamentación, como una garantía contra la arbitrariedad, puesto que una resolución sin motivación priva a las partes de la facultad de fiscalizar la reflexión del juzgador.

Que, en virtud al principio de responsabilidad previsto en el párrafo I) del Artículo 78 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, que orienta e inspira al procedimiento sancionador, sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa, las personas individuales o colectivas que resulten responsables.

Que, al presentar la Estación la prueba de descargo suficiente que desvirtúe el cargo formulado, hace que la misma no haya adecuado su conducta a lo previsto en el Artículo 11 y 14 del decreto N° 29158, correspondiendo entonces de conformidad a lo establecido en el Artículo 80 del Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, pronunciar resolución administrativa declarando improbada la comisión de la infracción tipificada en dicha norma.

#### **CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del Segundo Resuelve de la Resolución Administrativa ANH No. 1303/2011 de 29 de agosto de 2011, el Director Ejecutivo Interino de la ANH designado mediante Resolución Suprema No. 05747 de 05 de julio de 2011, delega en favor del Dr. Juan Marcelo Cazas Machicao, en su calidad de Director Jurídico, la sustanciación de cada una de las actuaciones hasta la decisión final fundamentada del procedimiento administrativo de cargos que conlleve una sanción pecuniaria, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 77 y siguientes del Decreto Supremo No. 27172 de 15 de septiembre de 2003.

#### **POR TANTO:**

El Director Jurídico de la ANH, en virtud a las facultades y atribuciones conferidas por las normas jurídicas, legales, administrativas, sectoriales, regulatorias y sus reglamentos vigentes y aplicables, así como, de conformidad con lo señalado por el inc. b) del Artículo 80 del Decreto Supremo No. 27172 de 15 de septiembre de 2003, en nombre y representación del Estado Boliviano,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO.-** Declarar **IMPROBADO** el cargo formulado mediante Auto de fecha 01 de febrero de 2011, contra la Empresa Estación de Servicio de Combustibles Líquidos "Varela" ubicada en el Km. 15 de la carretera entre la ciudad de El Alto y Tiahuanaco, localidad de Laja del departamento de La Paz, por no ser responsable de no emitir los partes de recepción de combustibles líquidos, conducta contravencional que se encuentra prevista y sancionada en el Artículo 11 y 14 del Decreto Supremo N° 29158.

Notifíquese con la presente Resolución Administrativa a la Estación en su domicilio procesal señalado en secretaria de la ANH, en la forma prevista por el inciso b) del Art. 13 del Decreto Supremo No. 27172, Regístrese, Comuníquese a la DE y DAF y Archívese en la DJ.

  
Abog. Daniel Hernán Puyal Escobar  
ASESOR LEGAL  
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

  
J. Marcelo Cazas Machicao  
DIRECTOR JURIDICO  
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS